



**Universidad
Zaragoza**

TRABAJO DE FIN DE GRADO

**LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL
ABOGADO POR
PÉRDIDA DE LA OPORTUNIDAD PROCESAL**

Autora:

Veronica Maxim

Directora:

M^a del Carmen Bayod López

*Facultad de Derecho/ Universidad de Zaragoza
Año 2020*

INDICE (TABLA DE CONTENIDO)

RESUMEN.....	1
ABREVIATURAS.....	2
INTRODUCCIÓN.....	3
1. RELACIÓN DEL ABOGADO CON SUS CLIENTES.....	5
1.1 Naturaleza de la prestación.....	5
1.2 Obligación de medios o de resultados.....	6
1.3 El régimen jurídico y las fuentes de las obligaciones del abogado.....	8
1.4 Responsabilidad contractual o extracontractual.....	10
1.5 Cliente consumidor.....	13
2. LEX ARTIS Y LOS DEBERES DEL ABOGADO.....	14
3. EL DAÑO.....	18
3.1 Daño moral y daño patrimonial.....	18
3.2 Valoración de los daños.....	21
4. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.....	24
5. CONCLUSIONES.....	27
BIBLIOGRAFIA.....	28
TABLA DE SENTENCIAS.....	31
LEGISLACIÓN.....	33

RESUMEN

Las reclamaciones por mala praxis del abogado han incrementado de forma considerable en los últimos años. La actividad profesional del abogado calificada como una obligación de medios y no de resultados, debe desarrollarse con la diligencia requerida por la *lex artis*. Falta de diligencia determina la pérdida de la oportunidad procesal que la nueva doctrina jurisprudencial califica como daño patrimonial. El presente Trabajo Fin de Grado analiza la responsabilidad civil de abogado, especialmente se presta atención en la valoración del daño y la determinación del quantum indemnizatorio. Por último, se hace referencia a las cláusulas *claim made* de los contratos de responsabilidad civil profesional.

Palabras claves: mala praxis, abogados, *lex artis*, pérdida de la oportunidad procesal, daño, indemnización, *claim made*.

ABSTRACT

The claims for lawyer bad practice have increased significantly in recent years. The professional activity of the lawyer, qualified as an obligation of means and not of results, must be carried with the diligence required by the *lex artis*. Lack of diligence determines the loss of procedural opportunity that the new jurisprudential doctrine classifies as property damage. The present essay analyzes the civil liability of the lawyer, in particular attention is paid to evaluating damage and the determination of the compensation quantum. Lastly, it made reference to the claim made clauses of professional civil liability contracts.

Keywords: civil liability, bad practice, lawyers, *lex artis*, loss of procedural opportunity, damage, compensation, claim made.

ABREVIATURAS

Art. /Arts: Artículo/s

AP: Audiencia Provincial

CC: Código Civil

CDA: Código Deontológico de la Abogacía

CE: Constitución Europea

CP: Código Penal

Dir.: Directiva

EGAE: Estatuto General de la Abogacía Española

LEC: Ley de enjuiciamiento civil

LCS: Ley de Contrato de Seguro

LGDCU: Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios

LOPJ: Ley Orgánica del Poder Judicial

LSC: Ley de Sociedades de Capital

LCS: Ley de Contrato de Seguro

SAP: Sentencia Audiencia Provincial

STS/SSTS: Sentencia Tribunal Supremo

STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TS: Tribunal Supremo

UNINDROIT: Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado

INTRODUCCION

El trabajo plantea como cuestión principal los aspectos generales de la responsabilidad civil del Abogado en el ejercicio de su profesión. Se ha realizado un estudio con base casuística y jurisprudencial. Son cada vez más frecuentes las demandas de responsabilidad civil contra el letrado que con su actuación negligente o dolosa causa un daño al cliente/consumidor. Frente al anterior cliente lego en derecho, hoy día el cliente cada vez más exigente reclama sus derechos. El tema me ha atraído especial interés desde punto de vista de un futuro profesional. Así, antes de prestar esta noble profesión, viene bien saber de antemano que el abogado como cualquier otro profesional incurre en errores que, como no puede ser otra manera, salen costando caro.

Para alcanzar el objetivo de este trabajo he realizado un estudio conforme la siguiente estructura:

1. La naturaleza jurídica de la relación del abogado con su cliente examinando la naturaleza contractual de la prestación, la obligación de medios o de resultados, el régimen jurídico y las fuentes de sus obligaciones, la responsabilidad contractual o extracontractual, y además se hace referencia al cliente consumidor a efectos de la normativa de consumo.
2. *Lex artis* y los deberes del Abogado que tiene que cumplir en su actividad profesional, deberes cuyo incumplimiento genera el deber de indemnizar el perjuicio causado.
3. El daño como pérdida de la oportunidad procesal, la valoración del daño moral, el daño patrimonial y el método juicio del juicio aplicado para cuantificar la indemnización.
4. La obligación del abogado de tener contratado un seguro de responsabilidad civil, igual que otros profesionales como médicos, ingenieros, arquitectos, que es necesario para hacer frente al grave quebranto económico ante una condena de responsabilidad civil profesional. También en este último capítulo se hace referencia a la doctrina de las cláusulas de limitación temporal (*claims made*) de los contratos de responsabilidad civil.

Respecto a la metodología, las fuentes empleadas en este trabajo han sido de objeto clave para cumplir con el objetivo propuesto. Aparte de la legislación aplicada a la institución de responsabilidad civil y las fuentes de las obligaciones contractuales, un gran

aporte lo ha tenido la jurisprudencia más novedosa que marca la practica forense. Entre otras, se han consultado las resoluciones del Tribunal Supremo, y también resoluciones de Audiencias Provinciales. Entre las resoluciones del Supremo, se cita de forma reiterada la STS de 27 de julio de 2006 (RJ 2006/6548) siendo importante desde punto de vista jurisprudencial por demarcar la identificación y la valoración del daño moral y el daño patrimonial vinculado causalmente con la conducta profesional del abogado. En caso de la aplicación de la normativa de consumo se cita la STJUE de 15 de enero de 2015.

Un elemento importante que han marcado la comprensión del tema lo han tenido los trabajos doctrinales. Entre ello, debo hacer referencia a *“Nueva perspectiva de la responsabilidad civil del Abogado”* de CHAPARRO MATAMOROS P. o *“La responsabilidad civil del Abogado en el Derecho Español: Perspectiva jurisprudencial”* de CRESPO MORA Mª C.

Todas estas fuentes analizadas a lo largo del trabajo, han contribuido a realizar un conocimiento global de los aspectos de responsabilidad civil profesional del abogado como consecuencia a una mala praxis.

1. RELACION DEL ABOGADO CON SUS CLIENTES

1.1 Naturaleza jurídica de la relación profesional

El contrato realizado entre el abogado con su cliente ya sea verbal o escrito contiene actuaciones judiciales o extrajudiciales en el que el abogado se compromete a prestar un servicio de asesoramiento jurídico, así como planteamiento y dirección de los pleitos. La relación jurídica entre el cliente y el abogado, por regla general, corresponde al esquema de un arrendamiento de servicios reglamentado en los arts. 1583 a 1587CC, en relación con el art.1544 del mismo texto legal en el que *“una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar un servicio por un precio justo”*. La regulación del contrato de arrendamiento de servicio del CC ha sido considerada por algunos autores como obsoleta y antiquada¹.

La escasa regulación de CC, para dar respuesta a los problemas derivados de la actividad de los profesionales liberales ha llevado a un sector de la doctrina española a proponer la aplicación, bien directamente o bien por analogía², del régimen jurídico del contrato de mandato regulado desde el artículo 1709 al 1739 del CC. Pese a que esta doctrina encontró cierta acogida en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el siglo pasado, en la actualidad ninguna sentencia del TS no considera la alternativa del mandato, puesto que el carácter gratuito del contrato de mandato choca con la actividad de los profesionales liberales, que se presume siempre onerosa³.

En actualidad y una tendencia jurisprudencial más moderna. En esta línea SAP TF 234/2014 de 2 de mayo (ROJ: 1714/2014) afirma *“que las partes están vinculadas por un contrato de carácter civil de naturaleza mixta (contrato híbrido de servicio y de obra siendo marginales los elementos de estos)”*. Por su parte el Supremo en algunas

¹ CRESPO MORA, M^a C., «La responsabilidad civil del abogado en el derecho español: perspectiva jurisprudencial»; *Revista de Derecho*; Universidad del Norte, n° 25 primer semestre 2006, pags.257-285, en esp.págs.263-264 considera que la calificación que vincula al abogado con su cliente como de arrendamiento de servicios resulta criticable atendidos los artículos 1.583 a 1.587 del CC, reguladores del arrendamiento de servicios, pues emplean una terminología (“criados”) no solo desfasada sino también “claramente contraria a la sensibilidad de nuestra época”. Remarca, además que los artículos 1584 a 1586 del CC han sido tácitamente derogados por la Constitución y por la normativa laboral promulgada tras la entrada en vigor de la misma, y tal como ponen de manifiesto las SSTS núm.275/1998 de 25 de marzo (RJ 1998/1651), núm. 589/2000, de 8 de junio (RJ 2000/5098), núm.498/2001, de 23 de mayo (RJ 2001/3372) y núm. 1291/2002, de 30 de diciembre (RJ 2003/333).

² CRESPO MORA, M^a C., «La responsabilidad...», cit., pág.257.

³ CRESPO MORA, M^a C., «La responsabilidad...», cit., pág.257.

sentencias califica la relación contractual del abogado con su cliente como un contrato de gestión, que contiene elementos del contrato de arrendamiento de servicios y del mandato⁴.

Ahora bien, hay determinadas actuaciones extrajudiciales donde la prestación principal del abogado consiste en elaboración de un dictamen, redacción de un informe, un contrato, redacción de los estatutos de una sociedad o asociación, capitulaciones matrimoniales, que han sido calificados por el TS como un arrendamiento de obra⁵ regulado en los arts. 1588 y ss. CC.

Sobre las formas de ejercicio profesional cabe mencionar las determinadas formas organizativas. Por un lado, la actividad se desarrolla de forma individual: titular de un despacho-por cuenta propia, el abogado que prestar sus servicios por cuenta ajena sujeto a régimen laboral común, o prestar sus servicios en despacho de Abogados individual o colectivo mediante relación laboral especial desarrollada por Real Decreto 133/2006 de 17 de noviembre. No olvidar la figura del Abogado al servicio de la Administración Pública sujeto al Derecho Administrativo. Por otra parte, el ejercicio de la Abogacía puede realizarse de manera colectiva en forma societaria o no societaria, que se regirán por lo dispuesto en la Ley 2/2007 de 15 de marzo de Sociedades Profesionales.

1.2 Obligación de medios o de resultados

Las obligaciones de la actividad profesional por vía de la regla son de medios y no de resultados, solo se exige que ejecute su actividad con la diligencia exigible⁶.

⁴ En este sentido STS 50/2020 de 22 de enero (ROJ:99/2020) sobre el vínculo abogado/cliente afirma: «La relación contractual existente entre abogado y cliente se desenvuelve normalmente en el marco de un contrato de gestión que la jurisprudencia construye con elementos tomados del arrendamiento de servicios y del mandato(SSTs 14 de julio de 2005, rec.nº 971/1999; 30 de marzo de 2006, rec.nº 2001/1999; 26 de febrero de 2007, rec.nº 715/2000; 2 de marzo de 2007, rec.nº 1689/2000; 21 de junio de 2007, rec.nº 4486/2000; 18 de octubre de 2007, rec.nº 4086/2000; 22 de octubre de 2008, rec.nº 655/2003; 282/2013, de 22 de 99/abril, rec.nº 896/2009 y 10 de junio de 2019, rec.nº 3352/2016)».

⁵ Las STS de 3 de octubre de 1998 (RJ 1998/8587) y la de 23 de mayo de 2001(RJ 2001/3372) consideran que la elaboración de un dictamen constituye un arrendamiento de obra.

⁶ Véase en este sentido la STS de 14 de diciembre 2005 (RJ 2006/1225), según la cual «el contrato de prestación de servicios es definido en el artículo 1544 del Código Civil conjuntamente con el de obra, a los que llama de arrendamiento, como concreta en llevar la dirección de un proceso que es una actividad de medios, no se resultados, pues no se obliga a que tenga aquel por el que una de las partes se obliga a prestar a la otra un servicio por un precio cierto y que en el caso del Abogado se éxito la acción ejercitada sino a ejercitar esta de conformidad con lo pactado y por las normas prescritas reglamentariamente, constituidas en esta caso por el Real Decreto 2090/1982, 24 de julio, del Estatuto General de la Abogacía, y, en concreto,

Estamos ante una obligación de medios en los casos donde el resultado no depende exclusivamente de la voluntad del abogado. Junto a actuación del abogado intervienen factores ajenos como la defensa de la contraparte, el carácter del Juez⁷ que dicte la sentencia, etc. En estos casos, una vez aceptado el encargo, su actividad se destinara a satisfacer los intereses del cliente, pero no existe el deber de alcanzar de manera obligatoria⁸. MARTINEZ CALCERRADA, magistrado ponente del TS hace una reflexión sobre el arrendamiento de servicios y la obligación de medios en la STS de 12 de diciembre de 2003 (RJ 2013/9285) con el siguiente tenor:

“ En el encargo al Abogado por su cliente, es obvio que, se está en presencia por lo general y al margen de otras prestaciones, en su caso conexas de un arrendamiento de servicios o «locatio operarum» en mejor modo, incluso siguiendo la nueva terminología del Proyecto de Reforma del Código Civil...«contrato de servicios», en la idea de que una persona con el título en Abogado o Procurador se obliga a presentar unos determinados servicios, esto es, el desempeño de la actividad profesional a quien acude al mismo acuciado por la necesidad o problema solicitando la asistencia consistente en la correspondiente defensa judicial o extrajudicial de los intereses confiados; el Abogado, pues, comparte una obligación de medios, obligándose exclusivamente a desplegar sus actividades con la diligencia y acorde con la *lex artis*, sin que por tanto garantice o se comprometa al resultado de la misma «locatio operis»-el éxito de la pretensión”. El incumplimiento no será no alcanzar el resultado esperado por el cliente, sino que el dicho

por los artículos 53,54 y 102... Todas ellas configuran un marco normativo en el que Abogado compromete su actuación para con la parte por él defendida, ajustada a los términos de la relación contractual que entre ellos existe, y al cumplimiento con máximo celo y diligencia de la misión de defensa que le sea encomendada, ateniéndose a la exigencias técnicas, deontológicas y morales adecuadas a la tutela jurídica de cada asunto y realizando, en suma, de una forma diligente las actividades que le imponga el asunto sometido a su consideración; obligaciones cuyo incumplimiento da lugar a la existencia de responsabilidad, de acuerdo con el artículo 102».

⁷ En esta línea la STS de 25 de noviembre de 1999 (RJ 1999/9133) expresa «existirá obligación de medios (y no de resultados) en los casos en los que el resultado final pretendido por el cliente no dependa de forma exclusiva de la voluntad del Abogado, sino de un tercero, como puede ser, principalmente el Juez, pero también la contraparte, u otros sujetos ajenos al litigio », la STS de 3 de octubre de 1998(RJ:1998/8587) indica que «el Abogado no puede ser responsable de un acto de tercero(órgano judicial), que puede estar o no de acuerdo con la tesis y argumentación que hayan formulado en defensa de los intereses encomendados».

⁸ A este respecto la STS 3120/2013 de 22 de abril (RJ 2013/3690) expresa: « La prestación del abogado debe calificarse como una obligación de medios o de actividad y no de resultado [...] dirigida para la consecución de un resultado, aunque el objeto de la obligación no es la obtención del resultado, sino la ejecución de la actividad orientada a este fin».

profesional en la ejecución de su prestación, no adecuo su conducta a las exigencias de la *lex artis*.

El *onus probandi* (carga de la prueba) le corresponde al cliente-demandante a quien incumbe demostrar el incumplimiento de la *lex artis* por parte del abogado, y la existencia de un nexo causal entre el incumplimiento y el daño causado. Mientras no se demuestre lo contrario, el abogado *ab initio* goza de presunción de diligencia en su actuación profesional⁹.

No obstante, habrá una obligación de resultado cuando, habiendo recibido y aceptado el encargo del cliente, la obtención de aquellos dependerá exclusivamente de la voluntad del Abogado. Esto se da en los arrendamientos de obra (redactar informes, dictámenes, estatutos de una sociedad) donde la responsabilidad nacerá por la no consecución del resultado de satisfacer el interés del cliente o la obtención de un resultado defectuoso. En este supuesto la carga de la prueba corresponde al cliente mientras que el profesional si quiere exonerarse de responsabilidad, tendrá la carga de probar que el incumplimiento no le es imputable y se debió a una causa ajena (fuerza mayor, caso fortuito, intervención de un tercero, culpa de la víctima).

1.3 El régimen jurídico y las fuentes de las obligaciones del abogado

Para determinar el régimen de jurídico de las obligaciones del abogado, en concreto el conjunto de derechos-deberes ha de acudir al Código Civil; a las normas sobre el contrato de arrendamiento de servicios (arts.1583ss.), sobre el contrato de mandato (arts.1542ss.) o en su caso sobre contrato de obra (arts.1588ss.CC), complementado con el régimen general de las obligaciones contractuales (arts.1.101ss. del Código), los arts.25 y ss. de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) y el art.546.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Junto a normas de rango legal, del régimen de responsabilidad de Abogado y el canon de diligencia exigible se encuentran en las siguientes normas de rango

⁹ STS 3120/2013 de 22 de abril de 2013 (RJ 2013/3690).

reglamentario o estatuario que regulan la profesión tales como el Estatuto General de la Abogacía Española (EGAE)¹⁰, el Código Deontológico de la Abogacía (CDA)¹¹, el Código de Deontología de los Abogados de la Comunidad Europea¹², asimismo la normativa desarrollada por los Consejos de Colegios autonómicos y los Estatutos del Ilustre Colegio en el que están colegiados.

El en EGAE se contemplan los deberes del abogado en su relación con sus clientes en el art.42, y la responsabilidad civil y penal¹³ del abogado en el art.79. La relación del abogado con su cliente se contempla en el art. 13 del CDA.

En lo que ve la responsabilidad civil de los despachos colectivos, debe tenerse presente la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales (BOE 16 de marzo). Obviamente la actividad es objeto de un contrato de servicios celebrado con el cliente, sujeto a la doctrina general de la responsabilidad civil tal y como la pone de manifiesto el art. 11 de la presente ley: “De las deudas sociales responderá la sociedad con todo su patrimonio, y los profesionales, socios o no, que hayan actuado, siéndoles de aplicación las reglas generales sobre la responsabilidad contractual o extracontractual que correspondan”. Sobre este hecho REGLERO CAMPOS¹⁴ reflexiona que la previsión hecha por dicho artículo es totalmente desacertada puesto que se hace responsable solidarios a todos los profesionales que han intervenido en el asunto sin tener en cuenta su grado de participación en el mismo y la naturaleza de su relación con la sociedad profesional. Considera que “el régimen de responsabilidad debió haberse guiado o bien por los principios del art.1093 CC, o bien atendiendo al criterio de la responsabilidad significativa”.

¹⁰ Estatuto General de la Abogacía Española aprobado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio BOE nº 164, de 10/07/2001.

¹¹ Código deontológico aprobado en el Pleno del CGA de 27 de noviembre de 2002, adoptado al nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio.

¹² Código de Deontología de los Abogados de la Comunidad Europea adaptado por unanimidad por los representantes de los Colegios de Abogados de la CEE, en la sesión plenaria de CCBE celebrada en Estrasburgo, de 28 de octubre de 1988,

¹³ Sobre la responsabilidad penal y civil, artículo 78 EGAE: «1. Los abogados están sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su profesión.

2. Los abogados en su ejercicio profesional, están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia dañen los intereses cuya defensa les hubiere sido confiada, responsabilidad que será exigible conforme a la legislación ordinaria ante los Tribunales de Justicia, pudiendo establecerse legalmente su aseguramiento obligatorio».

¹⁴ REGLERO CAMPOS, L.F., «La responsabilidad civil del abogado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo»; en *Revista de la Asociación española de abogados especializados en responsabilidad civil y seguro*, núm.11, 2007, pág.26.

Cuando se preste el servicio de asistencia jurídica gratuita¹⁵ a través de turno de oficio, siempre que el cliente tiene reconocido este derecho, va ser la Administración Pública¹⁶ quien deberá responder por las conductas que ocasione un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, sin perjuicio que una vez pagada la indemnización la Administración exigirá al prestador de servicio causante del daño la responsabilidad profesional que corresponda de oficio a través de vía administrativa.

1. 4 Responsabilidad contractual o extracontractual

El Código Civil diferencia dos tipos de responsabilidad: la responsabilidad contractual regulada en los art.1.101CC y ss., y la responsabilidad extracontractual o aquilina del 1902CC y ss.

La existencia de una relación jurídica entre el abogado y su cliente es un contrato (calificado con carácter general de arrendamiento de servicios, en algunos casos de comisión, o contrato de gestión, en algunos casos de arrendamiento de obra) donde corresponde al abogado prestar el servicio y al cliente entregar el pago o la remuneración por el servicio recibido. El incumplimiento del Abogado genera responsabilidad civil contractual. En el amparo del art.1.101CC “quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios causados las que en el cumplimiento de sus obligaciones incurriere en dolo, negligencia o morosidad, y los que incurriere en dolo, negligencia o morosidad, y los de que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas”.

¹⁵ La ley de Justicia Jurídica Gratuita de 1/1996, de 10 de enero, reconoce el derecho a tutela judicial efectiva a los ciudadanos con escasez de recursos a la hora de litigar. En su Exposición de Motivos se destaca este objetivo: «Los derechos otorgados a los ciudadanos por los artículos 24 y 25 de la Constitución son corolario evidente de la concepción social o asistencial del Estado Democrático de Derecho, tal y como ha sido configurado por nuestra Norma Fundamental. En lógica coherente con los contenidos de estos preceptos constitucionales, y al objeto de asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva, el artículo 119 del propio texto constitucional previene que la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, en todo caso, respeto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar».

¹⁶ Art.26. de la 1/1996, de 10 de enero, de la Ley de Justicia Gratuita, sobre la responsabilidad patrimonial: «En lo que afecta al funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita, los Colegios de Abogados y de Procuradores están sujetas a los mismos principios de responsabilidad patrimonial establecidos para las Administraciones públicas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre», actualmente derogada por la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que en su art.32.2 sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas expresa: «En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o un grupo de personas».

También queda bajo la órbita de responsabilidad civil la relación contractual entre el Abogado designado por el Turno de Oficio¹⁷ y su cliente, o cuando el Abogado interviene no en virtud de un contrato oneroso, sino por razones de amistad¹⁸ o parientes.

En la práctica forense de los tribunales, en la mayoría de los casos, la responsabilidad profesional de los abogados nace en la esfera procesal, muchas veces en actuaciones previas al proceso (por no haber respetado los plazos substantivos determinando la prescripción o caducidad de la acción, o prescripción de un delito), una vez iniciado el proceso (falta de contestación a la demanda, incomparecencia al juicio, no aportación de los medios de prueba), actuaciones posteriores al juicio (presentación extemporánea de recursos). Todas estas acciones impiden que la pretensión del cliente sea conocida por un determinado tribunal.

Ahora bien, la correcta ejecución del contrato estipulado entre el abogado y el cliente acarrea el nacimiento de o serie de prestaciones accesorias (la obligación de informar, el deber de secreto, la custodia y la devolución de documentos, etc.) que no se contemplan en el contrato, pero obviamente sirven para el cumplimiento de la prestación principal. Mientras el incumplimiento de la prestación principal está ligada a la responsabilidad contractual, cabe preguntarnos qué tipo de responsabilidad exige el incumplimiento de las prestaciones auxiliares? O parte de la doctrina afirma que son obligaciones extracontractuales puesto que no son pactadas expresamente en el contrato. La doctrina mayoritaria, aplicada por los Tribunales¹⁹, afirma su carácter contractual en la base de que la buena fe y los usos como criterios integradores de los contratos (art.1258CC) obligan a entender incorporadas tácitamente²⁰ al contrato celebrado entre el cliente y el abogado.

Mientras el origen de la responsabilidad contractual es el incumplimiento de una obligación preexistente entre las partes, la responsabilidad extracontractual tiene su origen el principio *neminem laedere* (no dañar a nadie, ni en su persona, ni en sus bienes),

¹⁷ STS 729/2007 de 21 de junio de 2007(RJ 2007/3781)

¹⁸ ROBOLLEDO VALERA A.L.; «Comentario a la Sentencia de 16 de diciembre de 1996», en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, N° 44, 1997, pág. 491.

¹⁹ En este sentido la STS de 25 de marzo de 1998 (RJ 1998/357), en relación con los deberes de información y devolución de documentación(expedientes) se afirma que «el abogado D. Salvador ha incumplido sendas obligaciones nacidas de los contratos de prestación de servicios, por lo que debe aplicarse el artículo 1101 del Código Civil».

²⁰ CHAPARRO MATAMOROS, P: «Nuevas perspectivas de la responsabilidad civil del abogado» en *CEFLegal Revista práctica de derecho*, N° 174, julio 2015, pág. 17.

por ello su campo de aplicación tiene como premisa la inexistencia de una relación previa que vincule a la víctima con el agente²¹. La regla general del art.1902CC obliga a reparar el daño causado al sujeto que “por acción u omisión causa daño al otro, interviniendo culpa o negligencia”.

Un ejemplo de responsabilidad extracontractual puede darse en el caso de los abogados auxiliares y pasante que por actuaciones causan un perjuicio al cliente del despacho. La STS 5670/2007 de 30 de julio condena al abogado titular del despacho que envió un recién Licenciado en Derecho que realizaba la pasantía en su despacho, a un acto procesal del que derivaron perjuicios para los clientes. La relación de los auxiliares y pasantes es de dependencia profesional y trabajan bajo la supervisión y control del abogado principal. Hablamos aquí de la responsabilidad por hecho ajeno determinada a falta de esa diligencia de padre de familia para prevenir el daño causada por la persona de él dependiente, lo que le obliga a responder por la existencia de culpa en *obligando o in vigilando* de carácter objetivo y directo. Así el perjudicado tiene acción directa contra el letrado principal con base en el artículo 1903.4º CC y contra el pasante según el artículo 1902 CC.

La acción de responsabilidad fundada en la culpa contractual tiene un régimen jurídico distinto de la basada en la extracontractual, como deriva de los títulos y las causas diferentes, aunque su finalidad última sea análoga, la diferencia se da en su plazo de prescripción. El código civil contempla un plazo de un año para la responsabilidad extracontractual ex artículo 1968.2CC y un plazo de cinco años ex artículo 1964.2CC para la responsabilidad contractual.

Grosso modo, la acción para exigir responsabilidad al abogado, se construye en torno los siguientes requisitos: acción u omisión culposa o negligente (incumplimiento de los deberes profesionales), un daño efectivo (disminución cierta de las posibilidades de defensa) y relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño producido (el nexo causal valorado con criterios de imputabilidad objetiva). En el desarrollo de este trabajo se van a ir analizando estos requisitos necesarios para la determinación de la responsabilidad profesional del abogado. No presto especial atención al nexo causal, por entender que este tema sigue los principios generales del régimen de responsabilidad y

²¹ SERRANO GARCIA, J. A. y BAYOD LOPEZ, Mª C., *Lecciones de Derecho Civil: Obligaciones y Contratos*, Volumen II, Editorial KRONOS, Zaragoza Septiembre 2015, pag.161.

no presenta mayores especialidades en el ámbito profesional. No será complicado apreciar el nexo causal cuando el daño se produzca por no interponer una demanda o un recurso a tiempo, no presentar una anotación de embargo o no asistir a una vista oral.

1.5 El cliente del abogado consumidor

La mayoría de los contratos concluidos entre el abogado y el cliente son contratos tipo o contratos con cláusulas generales no negociadas individualmente (por ejemplo el pago de los honorarios) al que el cliente se adhiere. En la STS 203/2011 de 8 de abril (ROJ: 2011/2011, Nº de Recurso: 1458/2007), el TS consideró que en una de consumidor está sujeta a la legislación protectora de consumidores, por lo que son inadmisibles las cláusulas abusivas por suponer un desequilibrio en detrimento del consumidor.

La reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de enero de 2015²² resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Lituania ante el impago de honorarios del cliente por los contratos jurídicos concluidos con su abogado. El cliente se oponía al pago porque los contratos de asistencia jurídica no determinaban con precisión los servicios jurídicos prestados, las modalidades de pago y los plazos en que debían pagarse.

Ha de atenderse, como afirma el TJUE que “en los contratos de servicios jurídicos [...] existe en principio una desigualdad entre los clientes-consumidores y los abogados a causa en especial, de la asimetría de la información de la que disponen esas partes. En efecto, el abogado tiene un alto nivel de competencias técnicas que los consumidores no posean necesariamente, de modo que éstos pueden tener dificultades para apreciar la calidad de los servicios que se prestan”²³. Dada esta situación de inferioridad en que se haya el cliente respecto al profesional, y sobre todo cuando se usan contratos tipos, el TJUE considera que la Directiva 93/13/CC, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, es aplicable a los contratos de servicios jurídicos concluidos por un abogado que presta en el ejercicio de su actividad

²² STJUE 15 de enero 2015, as. C-537/13, Birutė Šiba vs. Arūnas Devėnas, EU:C-2015-14.

²³ <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=161389&doclang=ES> . [Consulta 25 de mayo del 2020].

profesional un servicio oneroso a favor de una persona física que actúa para fines privados.

En esta misma línea podemos mencionar la reciente STS 121/2020 de 24 de febrero (ROJ: 505/2020) sobre la reclamación de honorarios por el abogado a su clienta²⁴.

2. LEX ARTIS Y LOS DEBERES DEL ABOGADO

El prestador del servicio debe prestar el servicio comprometido, es decir, desarrollar la conducta o actividad objeto del servicio prometido con la diligencia debida. De este modo, el prestador del servicio no incumple por el hecho de no haber alcanzado el resultado al que tiende el servicio; sino que incumple si no desarrolla la diligencia exigible en cada caso. La medida de la diligencia exigible²⁵ es variable para cada caso, según el artículo 1104 CC, dependerá de la naturaleza de la obligación y ha de corresponder a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Según el mismo artículo, cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que corresponde a un buen padre de familia²⁶. No obstante, el artículo 1104 CC hace

²⁴ Los contratos con los consumidores y usuarios se integraran conforme al principio de buena fe objetiva: «Para objetivar esa buena fe a que se refieren tanto el art. 65 TRLCU como el art. 1258 CC, resulta útil acudir a normas de disciplina corporativa, como el Estatuto General de la Abogacía (Real Decreto 658/2001, de 22 de junio) o el Código Deontológico de la Abogacía Española. Así, el art. 13.9.b) del mencionado Código establece la obligación del abogado de poner en conocimiento del cliente, incluso por escrito, cuando éste lo solicite del mismo modo, el importe aproximado, en cuanto sea posible, de los honorarios, o de las bases para su determinación. Norma que, de forma evidente, pretende imponer como buena práctica profesional que los honorarios sean libremente convenidos entre las partes y no impuestos por el abogado con posterioridad a la prestación del servicio. En consecuencia, cuando no exista contrato escrito ni hoja de encargo donde se indique la retribución del abogado o los criterios para su cálculo, de los arts. 60 y 65 TRLGCU se desprende que: i) el abogado debe informar a su cliente antes del inicio de la relación contractual sobre el importe de los honorarios que va a percibir por su actuación profesional; ii) la omisión de la información precontractual sobre el precio se integrará, conforme al principio de la buena fe objetiva, en beneficio del consumidor».

²⁵ Sobre la diligencia del profesional exigible STS de 739/2003, de 10 de julio (RJ 2003/4622): «Es pues, una medida que atiende a un criterio objetivo y abstracto. Exigible según las circunstancias es la diligencia que dentro de la vida social puede ser exigida en la situación concreta a persona razonable y sensata correspondiente al sector del tráfico o de la vida social cualificada por la clase de actividad a enjuiciar. Según este criterio objetivo, ha de resolverse la cuestión si el agente ha obrado con el cuidado, atención o perseverancia exigible, con la reflexión necesaria y el sacrificio de tiempo precisos. Al respecto no es pues decisivo la individualidad del agente, sino las circunstancias que determinarán la medida necesaria de diligencia y cautela. [...]. Pero también ha de tenerse en cuenta un aspecto subjetivo, en cuanto al sujeto que obra, le es posible prever las circunstancias del caso concreto».

²⁶ STS 739/2003, de 10 de julio (RJ 2003/4622)

referencia a la diligencia del hombre medio (padre de familia), en caso del abogado se trata de un profesional medio, cuya diligencia exigible es la *lex artis*.

En otro orden de ideas, la prestación del servicio del abogado, como relación *intuitu personae* incluye el deber de fidelidad que se deriva de la norma general del artículo 1258 CC y que impone al profesional el deber de ejecución óptima del servicio contratado, que presupone la adecuada preparación personal y supone el cumplimiento correcto, desprendiéndose de ello que si no se ejecuta o se hace incorrectamente, se produce el incumplimiento total o defectuoso de la obligación que corresponde al profesional²⁷.

Según Real Academia Española²⁸ *lex artis* es “el conjunto de reglas técnicas a que ha de ajustarse la actuación de un profesional en ejercicio de su arte u oficio”. En el ámbito de responsabilidad civil profesional no puede tratarse de mismo modo la *lex artis* del médico, del ingeniero, que la del abogado, variando la *lex artis* de una profesión a otra, no existiendo reglas determinadas.

En caso del abogado no hay conjunto de reglas técnicas, ni normas, ni protocolos, solo una amplia norma contenida en el art.42 EGA con el siguiente tenor: “1. Son obligaciones del abogado para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de sus relaciones contractuales, el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada con **el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional**, atendiendo las exigencias técnicas, deontológicas y éticas adecuadas a la tutela jurídica del asunto. 2. El abogado realizará diligentemente sus actividades profesionales que le imponga la defensa del asunto encomendado **ateniéndose a las exigencias técnicas, deontológicas y éticas** adecuadas a la tutela del dicho asunto y pudiendo auxiliarse de sus colaboradores y otros compañeros, quien actúen bajo su responsabilidad. 3. En todo caso, el abogado **deberá identificarse ante la persona a la que asesore o defienda** incluso cuando lo hiciera por cuenta de un tercero, a fin de asumir las responsabilidades civiles, penales y deontológicas que, en su caso, correspondan.

²⁷ Véase STS de 11 de noviembre de 1995(RJ 1995/8735), STS de 28 de enero 1998(RJ 1998/357).

²⁸ Definición “lex artis”, vista en <https://dej.rae.es/>. [Consulta: 14 de febrero].

Relacionado con los deberes hay que matizar que no hay un elenco cerrado²⁹ de los dichos deberes o prestaciones accesorias necesarias para el cumplimiento del objeto principal del contrato, puesto que no se encuentran reguladas de forma exhaustiva en alguna norma reguladora de la profesión³⁰, tan solo en el art.42.2 EGA anteriormente expuesto recoge de forma breve alguna de ellas.

La jurisprudencia³¹ ha definido con más detalles algunos de estos deberes, como las que analizamos a continuación:

Comenzando con el deber de información, es uno de los comportamientos que debe existir durante la vigencia de la relación contractual y en el momento de la extinción. Con carácter previo a un litigio, el abogado debe informar fielmente a su cliente de sus posibles pretensiones, de si están fundadas o no, de las probabilidades razonables de éxito o de fracaso, del coste del proceso, del beneficio de alcanzar un arreglo amistoso, etc. Durante la sustanciación, el Abogado informado a su cliente sobre de la marcha del mismo, de la el conveniencia o no de la presentación de recursos, etc.

Otro deber importante es el de no relevar hechos o noticias que conoce en virtud de su actuación profesional, desarrollado por el propio EGA en los arts. 25.2, 32, 34.e y 42.1, también por el CDA en el art.5 en relación con el 542.3 LOPJ. El derecho a intimidad del cliente, como bien jurídico protegido, en relación con la lealtad del abogado encuentra previsión en el art.199 y 466.1 del Código Penal. Una muestra del deber de secreto lo recoge la STS de 17 de febrero de 1998 (RJ 1998/1633). El caso trata de un abogado que declara como testigo en el procedimiento civil seguido contra su cliente con el que ya no mantiene relaciones profesionales. La declaración del abogado se centró en los hechos de los que había tenido conocimiento en su condición de abogado de la parte demandada. El abogado no alegó en momento alguno el art.437.2 actualmente el 542.3 LOPJ,

²⁹ Entre otras STS de 19 de febrero (RJ 2014/1129), STS de 23 de mayo de 2001(RJ 2001/3372), STS de 30 de diciembre (RJ 2003/333) afirman: « No es posible efectuar de antemano un elenco cerrado de deberes u obligaciones que incumbe al profesional en el desempeño de su función».

³⁰ CRESPO MORA, M^a C., «La responsabilidad...» cit., pág.265.

³¹ STS 552/2005 de 14 de julio (RJ 2005/6701) «El deber de defensa judicial debe ceñirse al respeto de la lex artis [reglas de oficio], esto es, de las reglas técnicas de la abogacía comúnmente admitidas y adaptadas a las particulares circunstancias del caso. La jurisprudencia no ha formulado con pretensión de exhaustividad una enumeración de los deberes que comprende el ejercicio de este tipo de actividad profesional del abogado. Se ha perfilado únicamente a título de ejemplo algunos aspectos que debe comprender el ejercicio de esa prestación: información de la gravedad de situación, la conveniencia de acudir a los tribunales, de los costos del proceso y de las posibilidades de éxito o fracaso; cumplir con los deberes deontológicos de lealtad y honestidad en el desempeño del encargo; observar las leyes procesales; y aplicar al problema los indispensables conocimientos jurídicos».

pudiendo así haberse eximido de la obligación de declarar, quebrando lealtad y confianza en que se funda el secreto profesional.

Otro deber exigible es el conocimiento de la legislación y jurisprudencia, la ampliación y el conocimiento de las novedades legales y jurisprudenciales son imprescindibles para lograr el resultado pretendido. El Abogado debe rechazar la dirección de un asunto si considera que no es competente para dirigirlo, caso contrario responderá frente al cliente cuando el resultado desfavorable tenga su causa en su falta de cualificación para ese concreto asunto, o en la falta de dedicación necesaria³².

Sobre la obligación del Abogado de seguir instrucciones del cliente, aunque la labor del Abogado es la protección de los intereses del cliente, no hay que olvidar que el art.2.4CDA referente a la independencia del abogado permite rechazar las instrucciones que, en su contra de sus propios criterios profesionales, pretenda imponerle su cliente, o aquellas cuyo resultado riesgo/coste menoscaba los intereses del cliente, como claramente lo expresa la SAP TF 234/2014 de 2 de mayo (ROJ:1714/2014): "La obligación del Letrado no consiste en apoyar ciegamente las pretensiones de su cliente[...] sino incluso de freno a aquellas iniciativas de cliente que objetivamente, le perjudiquen, puesto que la pericia y ciencia del Letrado, (sus conocimientos jurídicos, combinados con la experiencia forense), deben encarrilarse a la protección de los intereses del cliente, incluso coartando o restringiendo sus decisiones cuando éstas sean objetivamente perjudiciales, aunque económicamente beneficien al Abogado, que -obviamente- va a ser retribuido por la actividad procesal en la que el cliente, ciegamente, se empeña".

Por último, el deber de adecuada custodia de todos los documentos, escritos, traslados y actuaciones que se derivan de la relación contractual y actuación profesional y, también con mayor intensidad, en el momento de la extinción, la entrega de toda aquella documentación al cliente³³. El incumplimiento de este deber accesorio tiene consecuencias en el art. 465 CP (obstrucción a la justicia y deslealtad profesional).

³² SAP TF 234/2014 de 2 de mayo (ROJ:1714/2014)

³³ REGLERO CAMPOS, L.F., «La responsabilidad civil...» cit. pág. 29.

3. EL DAÑO

3.1 Daño moral y daño patrimonial

El ordenamiento jurídico español define el daño como “cualquier **lesión o menoscabo de un derecho o un interés jurídicamente protegido**”³⁴. El daño constituye uno de los requisitos esenciales que deben de estar presentes para que exista responsabilidad civil, el cual además debe ser cierto³⁵ y acreditado por el perjudicado. El daño es el presupuesto necesario para toda responsabilidad; sin daño no hay responsabilidad, por más que deleznable que haya sido la conducta del agente³⁶.

La STS 801/2006 de 27 de julio (RJ 2006/6548) hace distinción entre los daños³⁷ vinculados a la conducta profesional del abogado: “Atendiendo a su origen, el daño causado a los bienes o derechos de una persona puede ser calificado como daño patrimonial, si se refiere a su patrimonio pecuniario; daño biológico, si se refiere a su integridad física; o daño moral, si se refiere al conjunto de derechos y bienes de la personalidad que integran el llamado patrimonio moral. Desde esta perspectiva u otra análoga, defendida por parte de la doctrina, no es inexacto calificar como daño moral el que tiene relación con la imposibilidad del ejercicio de los derechos fundamentales, integrados en el ámbito de personalidad, como es el derecho la tutela judicial efectiva”. La finalidad de esta distinción es la aplicación de unos criterios e otros para la cuantificación y restauración del patrimonio dañado, tanto personal como material a la situación que tendría si el acto dañoso no se hubiera producido³⁸. La restitución

³⁴ Art. 5191-3 de la «Presentación de los Libros Quinto y Sexto de la Propuesta de Código Civil elaborados por la Asociación de Profesores de Derecho Civil», 2016, pag. 310.

³⁵ Daño real, ya que según indica la jurisprudencia en la STS 1243/2000 de 29 de diciembre (ROJ: 9763/2000), STS 38/2006 de 19 de enero (ROJ: 123/2006), STS 1139/2007 de 30 de octubre (ROJ: 7175/2007) «no resultan indemnizable una mera esperanza imaginaria, dudosa y contingente».

³⁶ SERRANO GARCIA, J. A. y BAYOD LOPEZ, M^a C., *Lecciones...* cit., pág. 173.

³⁷ Sobre naturaleza de los daños que el mismo acto u omisión puede generar, la STS de 27 de junio (RJ 2006/6548) afirma: «Los daños originados en el patrimonio económico de una persona pueden ser no solo patrimoniales, sino también morales (el llamado por la ley premio de afectación de los bienes expropiados pueden ser un ejemplo de ello: artículo 74 de la Ley de Expropiación forzosa); los que afectan a su patrimonio biológico pueden ser de carácter moral o de carácter patrimonial (como admite expresamente el sistema de tasación legal de los daños corporales derivados del uso y circulación de vehículos de motor); y los daños producidos en el ámbito del patrimonio moral, que son los que aquí interesan, pueden ser de naturaleza patrimonial (llamados a veces daños patrimoniales indirectos o daños morales impropios) y no sólo moral (según admite implícitamente el artículo 9.3 de la Ley Orgánica de Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen)».

³⁸ SERRANO GARCIA, J. A. y BAYOD LOPEZ, M^a C., *Lecciones...* cit., pág. 175.

comprende aquello lo que hubiera obtenido o aquello desprendido de su patrimonio en conformidad con la terminología del art.1106 CC: “La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvo las disposiciones contenidas en los artículos siguientes”.

El daño producido en la esfera de un proceso en el que intervino el letrado, se mide por lo general en la pérdida de la oportunidad procesal³⁹ o pérdida de expectativas que la acción u omisión del Letrado produzca en la esfera del cliente, según la cual el abogado debería responder por la falsa ilusión creada en la esfera del cliente previa a la asunción del encargo⁴⁰.

Ahora bien, definido el daño y su distinción, en este punto nos interesa saber cómo identifican los tribunales la pérdida de la oportunidad, es daño moral o patrimonial?

La casuística de los tribunales es muy variada, pudiendo diferenciarse por varias posiciones, no existiendo unanimidad sobre la interpretación del daño. Por la regla general, la jurisprudencia ha reconocido la pérdida de la oportunidad indemnización de un daño moral vinculado a la imposibilidad de ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva⁴¹. Referente a esta línea, la STS 25/1998 de 28 de enero (RJ 1998/357) afirma que “nadie puede prever con absoluta seguridad que aquellas reclamación va ser obtenida, pero el profesional, con el incumplimiento culpable de su obligación, ha impedido la posibilidad de conseguirla, con lo que además, ha vulnerado el derecho del perjudicado a obtener la tutela judicial efectiva que consagra el artículo

³⁹ Referente a la doctrina de la pérdida de oportunidad, la reciente STS 50/2020, de 22 de enero (ROJ 99/2020) expresa: «Esta doctrina, carente de regulación normativa en el Código Civil, con antecedentes en la Ley 48/1998, de 30 diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE, nace con la finalidad de solventar las dificultades probatorias en la acreditación del nexo causal. Se aplica por TJUE, a título de ejemplo, en la sentencia del Tribunal General de 28 de febrero de 2018, asunto T-292/2015, caso Vakakis kai Synergate contra la Comisión. Tiene reflejo en el art.7.4.3 de los principios UNIDROIT, en el art.163 de la Parte General del Código Europeo de Contratos, así como en el art. 3:106 de los Principios del Derecho Europeo de Responsabilidad Civil».

⁴⁰ RODRÍGUEZ DIOSDADO, P.B., «La responsabilidad civil de los profesionales: abogados, asesoría jurídica del sindicato y periodistas. Una tímida visión comparada»; *Revista Internacional y Comparada de RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO*, Volumen 1, núm.1, enero-marzo 2014, pag.23.

⁴¹ Entre otras STS de 20 de mayo de 1996 (RJ 1996/3793)-por privación que tenía en su favor la parte demandante, STS de 11 de noviembre de 1997(RJ 1997/7871)-por verse privado del derecho a que las demandas fueran estudiadas por el Tribunal de Apelación, y en su caso, por el Tribunal Supremo, STS de 25 de junio de 1998 deriva el derecho de acceder a los recursos, STS 14 de mayo de 1999 y 29 de mayo de 2003 deriva el derecho de acceder a la tutela judicial efectiva.

24.1 de la Constitución, al quedarle coartada por la prescripción o caducidad”⁴² En este contexto la valoración del daño depende de la discrecionalidad del juzgador.

Por otra parte hay sentencias que han reconocido la indemnización por daño material, ente otras STS de 17 de noviembre de 1995(RJ 1995/8735), de 20 de mayo(RJ 1996/3793) y 16 de diciembre de 1996 (RJ 1996/8971), 28 de enero (RJ 1998/357), de 24 de septiembre (RJ 1998/7436) y de 3 de octubre de 1998 (RJ 1998/8587) permitiendo tener en cuenta la doctrina de la posibilidad del éxito del recurso frustrado.

La jurisprudencia más reciente inclina por considerar que el daño por frustración de una acción judicial que vulnera del derecho a la tutela judicial efectiva no será un daño moral, porque ese derecho es instrumental, si la acción frustrada tenía contenido económico que suponía beneficio para el cliente, ese daño debe ser calificado como daño patrimonial⁴³. El este sentido, la sentencia anteriormente citada STS 801/2006 de 27 de julio (RJ 2006/6548) desarrollo amplios aspectos sobre la distinta consideración del daño moral y del patrimonial, así como sobre el daño originado por la frustración de las de acciones judiciales: “Cuando el daño consiste en la frustración de una acción judicial, ligado a la llamada a veces concepción objetiva, el daño padecido pueda calificarse como moral, en cuanto está relacionado con la privación de un derecho fundamental), el carácter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el daño deba calificarse como patrimonial si el objeto de la acción frustrada, como sucede en la mayoría de las ocasiones –y, desde luego en el caso enjuiciado-tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico mediante el reconocimiento de un derecho a la anulación de esta naturaleza”.

En la práctica forense de los tribunales se da la existencia de casos de reclamación del lucro cesante⁴⁴ como parte del daño patrimonial, o caso de reclamación del daño

⁴² STS 25/1998 de 28 de enero (RJ 1998/357).

⁴³ STS 583/2015 de 23 de octubre (ROJ: STS 4290/2015), STS 447/2016, de 1 de julio (ROJ: 3155/2016), STS 30/2016 de 04 de febrero (ROJ 413/2016).

⁴⁴ STS de 19 de febrero de 2014 (RJ 2014/1129). El asunto inicial parte de encargo del cliente al letrado de compraventa de un inmueble. Debido a que no inscribió la titularidad ni cancelo la hipoteca anterior sobre la finca, su clienta fue desahuciada, perdiendo así la vivienda y las rentas que obtenía al alquilarla, pues que ese era el uso dado por la misma de su adquisición. El tribunal realiza un juicio de probabilidad por lo que se refiere a la valoración del lucro cesante y comprueba que desde que se adquirió la vivienda estuvo siempre alquilada hasta que fueron desahuciados (9 años). Por este hecho la probabilidad que se hubieran percibiendo rentas eran altas y de este modo cualifica el lucro cesante. Para la valoración del daño emergente tiene en cuenta el valor actualizado del inmueble, es decir, la cuantía económica que el cliente tendrá en su patrimonio de no haber padecido el daño.

moral junto al patrimonial. Este supuesto se da en STS de 20 de mayo de 2014 (RJ 2014/3761). En el caso se condena por daño material como pérdida de oportunidad procesal, por la imposibilidad de obtener una indemnización por el fallecimiento de sus familiares (en el siniestro del 7 de agosto de 1996 en el Camping las Nieves de Biescas), similar a la reconocida a los que sí habían reclamado a tiempo. Junto al daño material de 360.607,26 euros por cada cónyuge e hijo fallecidos, se reconoce a cada uno de los demandantes más 60000 euros en concepto de daño moral por la circunstancia de que los demandantes tuvieron que soportar, durante diez años de espera, mientras otros perjudicados por el mismo siniestro obtenían una sentencia favorable años antes.

Más reciente la sentencia dictada por la SAP Madrid N° 81/2019 Rec.633/2019(ROJ: SAP M 11706/2019) codena a un abogado junto con su aseguradora al pago de una de las mayores indemnizaciones conocidas hasta la fecha por daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil profesional de un abogado. El letrado condenado se encargó de la defensa de su clienta y otros afectados en un expediente expropiatorio. El Abogado no notificó la sentencia desestimatoria del contencioso administrativo a su clienta que perdió la oportunidad de interponer recurso en casación, al considerar improcedente por arriesgado el recurso, sin embargo la AP afirma que “la decisión de recurrir o no una sentencia desfavorable pertenecen en exclusiva al titular del derecho a la tutela efectiva, esto es, al litigante”. En su demanda, la litigante solicitaba una indemnización constante en la diferencia entre lo que habría obtenido de haberse interpuesto casación y la determinación del justiprecio realizada por el juzgado de lo contencioso. El Juzgado de Primera Instancia estimó parciamente la demanda, considerando que se estaba ante un daño moral por pérdida de a oportunidad reconociendo solo una indemnización de 75.131,50 euros. No obstante la AP afirma que en este caso estamos ante un estricto daño patrimonial condenando al letrado demandado y a las aseguradoras al pago de forma solidaria a la demandante de 3.658.980.06 euros además de pagar las costas del procedimiento.

3. 2 Valoración del daño: juicio del juicio

Una vez determinado el daño resarcible se procede a calcular el *quantum* indemnizatorio, que no resulta un tarea sencilla, puesto que no existe normativa específica

que regule este aspecto. A la hora de calcular las indemnizar en los casos de responsabilidad civil de los abogados la jurisprudencia exige a los tribunales celebrar el denominado juicio dentro del juicio (pleito del pleito). El método juicio del juicio consiste que el órgano judicial, que conoce de la demanda de responsabilidad civil, debe realizar una operación intelectual analizando las probabilidades o expectativas de éxito de la misma de no haber medido la actuación negligente del abogado.

La jurisprudencia⁴⁵ hace diferencia entre el tratamiento del daño moral con respecto al daño patrimonial en el ámbito de la determinación del *quantum* indemnizatorio, sentando la doctrina de las posibilidades de éxito. A mayor abundamiento se pronuncia la STS de 27 de julio de 2006 (RJ 2006/6548): “Mientras el daño moral efectivos siempre que deba imputarse jurídicamente, salvo exclusión legal, debe ser objeto de compensación, aunque en una cuantía mínima, la valoración de la pérdida de oportunidad de carácter pecuniario abre un abanico que abarca desde la fijación de una indemnización equivalente al importe económico del bien o derecho reclamado, en el caso de que hubiera sido razonablemente segura la estimación de la acción, hasta la negación de toda indemnización en el caso de que un juicio razonable incline a pensar que la acción era manifiestamente infundada o presentaba obstáculos imposibles de superar y, en consecuencia, nunca hubiera podido prosperar en condiciones de normal previsibilidad. El daño por pérdida de oportunidad es hipotético y no puede dar lugar a indemnización cuando hay una razonable certidumbre de la imposibilidad del resultado. La responsabilidad por pérdida de oportunidad exige demostrar que el perjudicado se encontraba en una situación fáctica o jurídica idónea para realizarlas. En otro caso no puede considerarse que existe perjuicio alguno, ni frustración de la acción procesal, sino más bien un beneficio al supuesto perjudicado al apartarlo de una acción inútil, y ningún daño moral puede existir en esta privación, al menos en circunstancias normales”.

En virtud de este conjunto argumental, por un lado, sí de la pérdida de oportunidad constituye daño moral indemnizable, no siendo objeto de una tasación legal, el juzgador fija una cuantía a tanto alzado, de forma discrecional, diferente a la solicitada en el

⁴⁵ Esta doctrina, sentada en la Sentencia de 27 de julio de 2006, reproducida por las STS 157/2008, de 28 de febrero; 303/2009, de 12 de mayo; 250/2010, de 30 de abril; 123/2011, de 9 de marzo; 772/2011, de 27 de octubre; 739/2013, de 19 de noviembre; 583/2015, de 23 de octubre, entre otras y las citadas en ellas.

pleito⁴⁶. Por otro lado, si la pérdida de oportunidad es un daño patrimonial e hipotético, la indemnización debe dilucidarse conforme al parámetro de las posibilidades de éxito. De modo que si las probabilidades de éxito de la acción eran máximas o muy probables, la indemnización será equivalente a la cuantía del daño experimentado, de lo contrario si son escasas o nulas, la demanda debe ser rechazada. En los supuestos intermedios entre ambos niveles probabilísticos se atenderá en todo momento a criterios de proporcionalidad y de ponderación.

Puede darse casos donde la pretensión tenga un porcentaje de éxito de 100%, como en STS de 20 de mayo de 2014 (RJ 2014/3761) donde o parte de los perjudicados obtuvieron indemnización por pérdida de oportunidad mientras que otros perjudicados no han obtenido respuesta a sus actuaciones judiciales debido únicamente a la actuación el abogado que frustró sus posibilidades de éxito y les privó de la indemnización. En este caso el TS no debe hacer la valoración de las probabilidades de éxito, puesto que ya existe una sentencia como base de comparación.

Otro caso que hace referencia al porcentaje de éxito para determinar el *quantum* indemnizatorio es la STS de 5 de junio de 2013 (RJ 2013/4971). En el caso, se trata de la demanda interpuesta por una arrendataria de una vivienda contra su abogado en reclamación de daño y perjuicios causados por no haber ejercitado este el derecho de retracto dejando transcurrir el plazo. El juzgado de primera instancia estima la demanda concediendo a la arrendataria- demandante una indemnización superior a 200.000 euros. La Audiencia Provincial afirma que la acción es viable, pero no acredita prosperidad, puesto que para el éxito de la demanda hay que valorar los hipotéticos motivos de oposición que hubieran podido formulado los demandantes, fijando una indemnización

⁴⁶ En algunos casos no se motiva cual es el camino impuesto por el juzgador la imposición de la cuantía a tanto alzado. Así se desprende de la STS 441/2017, de 13 de julio (RJ 2017/2839), que anula por defectuosa motivación la sentencia de apelación que había fijado en 12.000 euros el daño derivado por negligencia de un letrado que presentó la demanda de un despido laboral fuera del plazo legalmente previsto. Afirma el TS : «La motivación contenida en la sentencia no expresa ni razona de forma clara cuáles son las circunstancias por las que fija a tanto alzado una determinada cantidad, y no otra, ni en que concepto se le indemniza, una motivación indudablemente ambigua en la que se mezcla el daño moral, el patrimonial y la pérdida de oportunidad para confirmar la sentencia del juzgado, que parece acudir al criterio de pérdida de oportunidad para indemnizar los daños y perjuicios por cumplimiento defectuoso del contrato en 12.000 euros, sin precisar que oportunidades se perdieron para cuantificar de esa forma y no de otra el daño resultante de la negligencia profesional, y sin hacer lo que corresponde en estos casos, como con reiteración ha declarado esta sala, esto es un cálculo de prosperabilidad de la acción frustrada por la negligencia del letrado; todo ello después de haber estimado la existencia de negligencia, el daño y la relación de causalidad entre uno y otro, lo que impide a esta sala dar una respuesta adecuada al recurso».

de 50.000 euros. Al no fijarse un porcentaje concreto de las posibilidades y aludir genéricamente a la incertidumbre del proceso, después de afirmar la viabilidad de la acción, el TS procede a analizar la cuantía de la indemnización. La Sala al analizar la posibilidad de éxito o de fracaso de la acción fija un porcentaje de 50% sobre la indemnización impuesta por la primera instancia y no 75% como la hizo la AP, subrayando “respetando la valoración fáctica hecha por la Audiencia Provincial no puede afirmarse que el porcentaje de posibilidades de fracaso sea superior al de posibilidades de éxito de la acción en el supuesto de que hubiera sido entablada”.

El método juicio del juicio has sido el objeto de varias críticas, puesto que se estaría llegando a una situación discriminatoria, únicamente podría resarcirse a aquellos clientes cuya pretensión tuviera ex ante altas posibilidades de éxito⁴⁷. En mi opinión, en caso de las demandas con escasas o nulas probabilidades, que se quedan en tierra de nadie, los tribunales podrían indemnizar una cuantía mínima, por no dejar indemne la falta de diligencia del abogado.

4. LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSCRITOS POR EL ABOGADO

Para hacer frente a los riesgos que pueden surgir en el desempeño de su actividad profesional, en la práctica habitual el abogado contrata un seguro de responsabilidad civil. El CDA en su artículo 21 obliga al abogado “a tener cubierta, con medios propios o con el recomendable aseguramiento, su responsabilidad profesional, en cuantía adecuada a los riesgos que implique”. Asimismo afirma a continuación “si el abogado preste su sus servicios en otro Estado Miembro de UE de acogida diferente de aquel donde este incorporado, deberá cumplir las disposiciones relativas a la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil profesional conforme las exigencias del Estado Miembro de origen y del Colegio de acogida”. Pese a la voluntariedad del texto⁴⁸ anterior que no

⁴⁷ CHAPARRO MATAMOROS, P., «La responsabilidad...», cit. pág. 34.

⁴⁸ El Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, en el art.78.2 tan solo establece que «Los abogados en su ejercicio profesional, están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia dañen los intereses cuya defensa les hubiere confiada, responsabilidad que será exigible conforme a la legislación ordinaria ante los Tribunales de Justicia, pudiendo establecerse legalmente su aseguramiento obligatorio».

impone una obligación de tener contratado un seguro, el nuevo EGAE aprobado por el Pleno de 12 de junio de 2013, hace referencia a la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil como requisito de la colegiación⁴⁹.

En cuanto a los despachos colectivos de abogados, la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, anteriormente citada, en su art.11.3 impone a la sociedad profesional el deber de contratar un seguro que cubra las responsabilidades en la que estas puedan incurrir en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyen el objeto social.

Los colegios de abogados suelen contratar a sus colegiados un seguro de responsabilidad civil con un límite de cobertura, ampliando el abogado en ejercicio, de forma voluntaria la cobertura original con una póliza de seguro más amplia. En la práctica, una aseguradora puede recibir reclamaciones posteriores a la vigencia del contrato por hechos que han sucedido durante su existencia. Para hacer frente a los daños que aparecen después de que se produzca el hecho que los genere, las aseguradoras introducen las cláusulas de delimitación temporal, siempre que estas cumplieran los requisitos formales del art.3LCS, resaltar la cláusula en el contrato y hacer constar su aceptación por escrito, y los requisitos del art.73 LCS, que se cumpliera con el plazo de cobertura mínimo de un año en la cláusula de pasado y futuro. Al fin de este asunto la STS 2116/2014 de 20 de mayo (RJ 2014/3761)⁵⁰ menciona que “las cláusulas de

⁴⁹ El art.8.1 del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española aprobado por el Pleno del CGAE de 12 de junio 2013, que sustituye al actual vigente, referente a los requisitos para la colegiación del abogado, en su punto i) expresa el requisito de «Contratar un seguro de responsabilidad civil cuyo objetivo será el de cubrir las responsabilidades en que pueda incurrir el Abogado por razón de su ejercicio profesional. Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas oportunas para facilitar este aseguramiento. No obstante, el seguro no se exigirán a los profesionales que actúen exclusivamente al servicio de una Administración Pública o cuando la actividad profesional se ejerza exclusivamente por cuenta de otro ya que tenga asegurada la cobertura por los riesgos que comprende el ejercicio de la profesión».

⁵⁰ En este caso concreto, el hecho causante que origina el resarcimiento sea cubierto no por el seguro que estuviera vigente cuando se produjo el dicho hecho, sino por la póliza que lo estuviera cuando se produjo la reclamación: «En atención a esta doctrina y al tenor de las referidas pólizas, interpretadas en beneficio y no en perjuicio del perjudicado, procede entender que lo determinante no es el momento en que se produjo el hecho causante sino si la reclamación del crédito se hizo por el asegurado o el perjudicado estando vigente el seguro, así como si el asegurado no conoció antes la existencia de incidencias o reclamaciones por ese hecho dañoso. En el presente caso la demanda se presentó el 13 de diciembre de 2006, estando en vigor ambas pólizas (pues la colectiva estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 2006 y la individual finalizaba el 2 de febrero de 2007). Y en cuanto al segundo aspecto, contrariamente a lo que sostiene la aseguradora, no puede considerarse probado que el letrado demandado fuera ya conocedor de que iba a exigírsele responsabilidad con anterioridad a la fecha de efecto de las respectivas pólizas dado que lo único que se ha podido acreditar es que no fue hasta el 8 de marzo de 2002 cuando remitió la documentación a su compañero, lo que no equivale a concluir que ya tuviera conocimiento de hecho de que sus clientes le fueran

delimitación temporal o "claims made" que buscan desplazar la deuda de responsabilidad al momento en que se produce la reclamación, al margen del seguro vigente al producirse el siniestro, han sido aceptadas por la jurisprudencia únicamente en tanto fueran en beneficio y no perjudicaran los derechos del asegurado o perjudicado, reputándose como lesivas en caso contrario". Sentando esta doctrina, entiende el TS que la reclamación va determinar el nacimiento de la obligación del asegurado. El art. 73 LCS⁵¹ en el segundo párrafo extiende la cobertura a las reclamaciones que se produzcan hasta un año después de expirar en contrato, y asimismo a las que tengan lugar durante ese periodo pero se deban a hechos acaecidos con anterioridad al comienzo de la vigencia del contrato de seguro.

La STS 252/2018, de 26 de abril (ROJ: 1496/2018) se pronuncia sobre las pólizas de responsabilidad de los arquitectos, aplicables sobre cláusulas *claim made* de otros seguros⁵². La Sala explica que se declaran admisibles los dos tipos cláusulas de limitación temporal, cada una de ellas con sus propios requisitos de validez⁵³: las cláusulas retrospectivas o de pasado (nacimiento de la obligación antes de la vigencia del seguro), y cláusulas prospectivas o de futuro (reclamación posterior a la vigencia del seguro) cada una reguladas en incisos diferentes del art.73LCS no siendo exigible que los requisitos de uno otro inciso sean cumulativos. Ahora con esta sentencia se sienta la doctrina jurisprudencial sobre las cláusulas *claim made* en las pólizas de responsabilidad civil, doctrina que ha sido reiterada recientemente en la STS 170/2019, de 20 de marzo.

a demandar o a requerir extrajudicialmente el importe del perjuicio que consideraban irrogado por su mala praxis, razonamiento que además corrobora el documento 8 de la demanda que sitúa en el 30 de octubre de 2006 la comunicación por la que se le anunciaba que se le iba a exigir responsabilidad civil por el incumplimiento del contrato de arrendamiento de servicios».

⁵¹ Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro, B.O.E núm. 250, de 17 de octubre de 1980.

⁵² BLÁQUEZ MARTIN, R., «Pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad civil de los profesionales jurídicos», *Jueces y Jueces para la Democracia*, Nº 17-2018, pag.5.

⁵³ El Tribunal Supremo fija la doctrina sobre las cláusulas "claim made" incluidas en contrato de seguro, <https://elderecho.com/la-validez-aislada-e-indistinta-de-las-clausulas-de-delimitacion-temporal-de-cobertura-o-claim-made-incluidas-en-las-polizas-de-seguro-del-art-73-2-ley-contrato-de-seguro>

5. CONCLUSIONES

PRIMERA. La relación contractual entre el abogado con su cliente con carácter general recibe la calificación jurídica de arrendamiento de servicios, en algunos casos contrato de gestión, arrendamiento de obra siempre sometida a responsabilidad general derivada del incumplimiento contractual conforme al artículo 1101CC y siguientes del mismo código. La prestación del abogado es por regla general una obligación de medios o de actividad y no de resultado.

SEGUNDA. La responsabilidad es contractual, en pocos casos extracontractual. La responsabilidad de cualquier tipo exige la concurrencia de los siguiente factores: acción u omisión de las obligaciones contractuales, derivada de dolo o negligencia, existencia de un resultado daño y la relación de causalidad entre los anteriores. La carga de la prueba corresponde al perjudicado.

TERCERO. Las fuentes del conjunto derecho-deberes de la relación contractual vienen impuestas por el CC, TRLGCU, EGAE, CDAE, Código Deontológico Europeo, la normativa desarrollada por los Consejos de Colegios autonómicos y los Estatutos del Ilustre Colegio al que pertenezcan.

CUARTO. Mediante la STUE de 15 de enero de 2015, el TJUE concluye que la relación contractual entre un abogado y el cliente queda bajo la órbita de la normativa comunitaria de la protección del consumidor siempre que el cliente sea una persona física cuya actuación es ajena a su actuación profesional.

QUINTO. La responsabilidad del abogado es subjetiva basada en una diligencia profesional mayor al del padre de familia. El abogado debe actuar conforme a los cánones normativos, deontológicos y éticos exigibles para cada caso concreto.

SEXTO. El daño es el elemento esencial para la existencia de responsabilidad civil. La jurisprudencia hace la distinción entre el daño moral y el daño material (daño emergente y lucro cesante) cuya finalidad es su cuantificación y reparar lo que se ha perdido. Ante la postura anterior que identificaba la pérdida de oportunidad como daño moral por la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, la postura reciente de los tribunales identifica la pérdida de oportunidad por frustración de acciones procesales como un daño de naturaleza patrimonial.

OCTAVO. Si la pérdida de oportunidad tiene contenido económico será preciso la aplicación realizar un cálculo de las probabilidades de éxito de la acción. La exigencia de responsabilidad exige que el perjudicado gozaba de una situación fáctica y jurídica idónea para la viabilidad de la acción. En base al principio de proporcionalidad la indemnización se comprenderá dentro del abanico de probabilidades de éxito de la pretensión. En caso de daño moral por la privación del derecho a la tutela judicial efectiva, la indemnización se fija de modo discrecional por el juzgador.

NOVENA. En la demanda de responsabilidad civil profesional el cliente se dirige frente al abogado y a su aseguradora. En la práctica, las aseguradoras suelen recibir reclamaciones por los daños que se han generado anteriormente o posteriormente de la vigencia de la póliza de seguro. Frente a este dilema, las aseguradoras recurren a las cláusulas de delimitación temporal a través de las cuales se busca desplazar el nacimiento de la obligación de reparar en momento en que se produce la reclamación y no al momento de producirse el daño, siendo admisible siempre que sean en beneficio y no perjudiquen los derechos del asegurado o perjudicado, reputándose lesiva en caso contrario.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

SERRANO GARCIA, A.J. y BAYOD LOPEZ, M^a C., *Lecciones de derecho civil: obligaciones y contratos*, Volumen II, Editorial KRONOS, Zaragoza, septiembre 2015

REVISTAS

ALBERRUCHE DIAZ-FLORES, M., «La responsabilidad civil del abogado por pérdida de oportunidad procesal», en *Actualidad Civil*, Numero 9-Septiembre 2014, pp. 947-953.

CHAPARRO MATAMOROS P., «Nuevas perspectiva de la responsabilidad civil del abogado», en *CEFLegal Revista práctica de derecho*, N^o.174, 2015, pp. 5-57.

PANIZA FULLANA, A., «Responsabilidad profesional del abogado por la pérdida de oportunidad procesal: la problemática determinación del quantum indemnizatorio», en *Revista civil-mercantil, Revista doctrinal*, Vol.1, núm. 11, marzo, 2012, págs. 51-64.

ROBOLLEDO VARELA A.L., «Comentario a la SENTENCIA de 16 de diciembre de 1996, Abogados: responsabilidad civil. Negligencia profesional: existencia. Daños y perjuicios: procedimientos para determinar la cuantía de la indemnización. Excepciones dilatorias: defecto legal en modo de proponer la demanda: falta de concreción de la cantidad solicitada ni de las bases de su determinación: inexistencia. Incongruencia y principio *iura novit curia*», en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, Nº 44, 1997, pp.474-500.

SALAS CARCELLER, A., «La pérdida de la oportunidad como criterio para determinar la indemnización derivada de responsabilidad civil profesional», en *Revista Aranzadi Doctrinal*, nº 8, año 2010, págs.17-24.

ARTICULOS DE REVISTAS ELECTRONICAS

ÁNGEL YÁGÜEZ, R.DE, «La responsabilidad civil de abogado», en *Indret*, [revista electrónica] enero 2008, pp.1-54, [consultado 10 de marzo de 2020]. Disponible en: http://www.indret.com/pdf/521_es.pdf

BLÁZQUEZ MARTIN, R., «Pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad civil de los profesionales jurídicos», en *Juezas y Jueces para la Democracia*, [revista electrónica], Nº17, págs.1-8,2018[consultado 25 de marzo de 2020]. Disponible en <http://www.juecesdemocracia.es/wp-content/uploads/2018/05/BOLETIN-17-2018.pdf>

CRESPO MORA, Mª C., «Responsabilidad del abogado en el derecho español: perspectiva jurisprudencial» en *Revista de Derecho*, Universidad del Norte [revista electrónica], nº 25, pp.259-287, 2006, ISSN 0121-8697, [consultado 10 de marzo de 2020]. Disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/851/85102507.pdf>

CRESPO MORA, Mª C., «Algunos aspectos problemáticos de la responsabilidad civil de los abogados en el derecho español», en *Revista Chilena de derecho privado* [revista

electrónica], N° 12, 2009, págs.101-133, [consultado 10 de marzo de 2020]. Disponible en <https://rchdp.cl/index.php/rchdp/article/view/263/248>

CHAPARRO MATAMORROS P., «La responsabilidad civil del abogado por no interposición de la acción de retracto en plazo. Comentario a la STS núm.373/2013, de 5 de junio (RJ 2013,4971)», *Rev. boliv. de derecho*[revista electrónica] n° 18, julio 2014, ISSN: 2070-8157, págs. 442-453,[consultado en 12 de marzo de 2020]. Disponible en <https://docplayer.es/19442154-Lawyer-s-liability-for-not-interpose-the-repurchase-s-action-in-term-comment-on-sts-no-373-2013-of-june-5-rj-2013-4971.html>

MARTI MARTI J., «Doctrina jurisprudencial reciente sobre el error de abogado» en *Revista de la Asociación española de abogados especializados en responsabilidad civil y seguro* [revista electrónica], N° 44,2012, págs.23-30, [consultado en 20 de marzo de 2020]. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4160190.pdf>

MARTINEZ GARCIA R., «Comentario a la STS 1ª de 22 de abril de 2013, Ponente Sr.Xiol Ríos, Responsabilidad profesional del abogado por negligencia profesional: perdida de oportunidad procesal. Concurrencia de causas. Cuantía de la indemnización», *Diario La Ley*, [revista electronica], N° 8146, septiembre, 2013,[consultado en 20 de mayo de 2020]. Disponible en <https://www.pgprocuradores.com/blog/wp-content/uploads/2013/09/Pradera-gonzalez-procuradores-analisis-sentencia-responsabilidad-profesional-del-abogado.pdf>

MONTERROSO CASADO, E., «La responsabilidad civil del abogado, criterios, supuestos y efectos», en *Saberes* [revista electrónica], vol.3, 2005[consultado en febrero de 2020]. Disponible en http://www.uax.es/publicaciones/archivos/SABDER05_006.pdf

MOREO ARIZA J., «La compleja configuración del daño en la responsabilidad civil del abogado», en *InDret* [revista electrónica], enero 2007, [consultado en 2 de abril de 2020]. Disponible en https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/414_es_1.pdf

REGLERO CAMPOS, F., «La responsabilidad civil del abogado en la Jurisprudencia del Supremo», en *Revista de la Asociación española de abogados especializados en responsabilidad civil y seguro*, [revista electrónica], núm. 11, 2007, págs.23-46, Disponible en <http://www.asociacionabogadosrcs.org/revistas/revista21.pdf>

RODRIGUEZ DIOSDADO P.B., «La responsabilidad civil de los profesionales: abogados, asesoría jurídica del sindicato y periodistas. Una tímida visión comparada», en *Revista Internacional y Comparada de RELACIONES LABORALES Y DERECHO DE EMPLEO* [revista electrónica], Volumen1, núm.1, 2014, [consultado en 10 de marzo de 2020]. Disponible en http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/179

SERRA RODRIGUEZ A., «La responsabilidad civil del abogado: algunas consideraciones sobre la naturaleza jurídica, el incumplimiento, la configuración de daño y su cuantificación en el derecho español», en *Revista de Justicia y Derecho* [revista electrónica] Volumen 2, N.2, 2019 [consultado en 2 de mayo de 2020]. Disponible en <http://www.revistajusticiayderecho.com>

PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS

MAGRO SERVET, V., « La validez aislada e indistinta de las cláusulas de delimitación temporal de cobertura, o claim made, incluidas en las pólizas de seguro del art.73.2 Ley Contrato de Seguro», *El derecho.com* [consultado 20 de mayo de 2020]. Disponible en <https://elderecho.com/la-validez-aislada-e-indistinta-de-las-clausulas-de-delimitacion-temporal-de-cobertura-o-claim-made-incluidas-en-las-polizas-de-seguro-del-art-73-2-ley-contrato-de-seguro>

MUÑOZ GONZALO, R., « El Tribunal Supremo fija doctrina sobre los requisitos de las cláusulas “claim maide” en los contratos de seguro», *Idibe.org* [consultado 20 de mayo de 2020]. Disponible en <https://idibe.org/noticias-legales/tribunal-supremo-fija-doctrina-los-requisitos-las-clausulas-claim-made-los-contratos-seguro/>

TABLA DE SENTENCIAS CITADAS

Sentencias del Tribunal de Justicia Europea

Sala y fecha	Referencia	Magistrado Ponente
Novena, 15/01/2015	C-537/13	Sr. Safjan
Tercera, 28/02/2018	T-292/15	Sra. N. Póltorak

Sentencias del Tribunal Supremo

Sala y fecha	Referencia	Magistrado Ponente
Civil, 17/11/1995	8735	Gumersindo Burgos Pérez de Andrade
Civil, 20/05/1996	3793	Oscar Gonzales Gonzales
Civil, 16/12/1996	8971	Pedro Gonzales Poveda
Civil, 11/11/1997	7871	Francisco Morales Morales
Civil, 25/03/1998	1651	Javier O.Callaghan Muñoz
Civil, 25/06/1998	5013	Luis Martinez Calcerrada y Gómez
Civil, 8/06/2000	5098	Javier O.Callaghan Muñoz
Civil, 23/05/2001	3372	Luis Martinez Calcerrada y Gómez
Civil, 30/12/2002	333	Luis Martinez Calcerrada y Gómez
Civil, 24/05/2003	543	D. Clemente Auger Liñán
Civil, 12/12/2003	9558	Luis Martinez Calcerrada y Gómez
Civil, 14/12/2005	1225	Juan Antonio Seijos Quintana
Civil, 27/07/2006	6548	Juan Antonio Xiol Ríos
Civil, 30/07/2007	5670	Juan Antonio Xiol Ríos
Civil, 22/10/2008	7063	Juan Antonio Xiol Ríos
Civil, 14/06/2010	462	Juan Antonio Xiol Ríos
Civil, 27/10/2011	7317	Juan Antonio Xiol Ríos
Civil, 22/04/2013	3690	Juan Antonio Xiol Ríos
Civil, 5/06/2013	4971	Juan Antonio Xiol Ríos
Civil, 19/11/2013	7448	Francisco Marín Castan
Civil, 19/02/2014	1129	Francisco Marín Castan
Civil, 20/05/2014	3761	Francisco Marín Castan
Civil, 26/04/2018	1496	Francisco Marin Castan
Civil, 22/01/2020	99	Luis Seoane Spiegelberg

Sentencias de Audiencias Provinciales

Sala y fecha	Referencia	Magistrado Ponente
SAP Santa Cruz de Tenerife, Civil, Sec.1ª, 2/05/2014	1714	Antonio Doreste Armas
SAP Madrid, Sec.12ª, Civil 27/02/2019	11706	Torres Fernández de Sevilla, José María

LEGISLACIÓN

Directiva 93/13 CEE del Consejo de 5 de Abril de 1993. DOCE nº 95 de 21 de abril de 1993.

Código civil aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889, BOE nº 206, de 25 de julio de 1889.

Código Deontológico, Adaptado al Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio aprobado en el Pleno de 27 de septiembre de 2002 y modificado por el Pleno de 10 de diciembre de 2002. BOE nº 164, de 10 de julio de 2001.

Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por el Real Decreto 658/2001. BOE nº 164, de 10 de julio de 2001.

Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado en el Pleno celebrado el día 12 de junio de 2013.

Ley 1/1996, de 10 de enero de Justicia Jurídica Gratuita. BOE nº. 11 de 12 de enero de 1996.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. BOE nº 7, de 08 de enero de 2000.

Ley Orgánica 15/1999, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE nº 157, de 2 de julio de 1985.

Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. BOE nº 250, de 17 de octubre de 1980.

Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales. BOE nº 65, de 16 de marzo de 2007.

Texto Refundido de la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarios, aprobado por Real Decreto Ley 1/2007 de 16 de noviembre, BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2007.

Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico de Sector Público, BOE nº 236 de 02 de octubre de 2015.

Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral con carácter especial de los abogados que presten servicios en despacho de abogados, individuales o colectivos, BOE nº 276, de 18/11/2006.